

La cohesión social en las agendas de recuperación post-COVID19

Jueves, 11 de marzo de 2021

Encuentro virtual del Programa EUROsociAL+

Seminario birregional

09:00 San José – 10:00 Bogotá – 12:00 Buenos Aires - 16:00 Bruselas

Nota conceptual

Nos proponemos un intercambio birregional que permita avanzar en planes que conecten relanzamiento económico e inversión social. Para ello, se abordarán las preguntas que surgen a la hora de enfrentar los efectos de la pandemia en clave de cohesión social: “sistemas de bienestar”, políticas fiscales, capacidades públicas de implementación, articulación público-privada e igualdad de género. Todo ello en el marco de los planes de recuperación y reactivación diseñados en Europa y América Latina.

Frente a la pandemia, los países latinoamericanos han aplicado importantes medidas de mitigación, pero con respuestas que no atacan los nudos críticos de sus modelos de sociedad. De aquí que, en ausencia de nuevas intervenciones de política pública, las desigualdades podrían profundizarse.

La recesión actual está liquidando años de progresos. De acuerdo con la CEPAL, el PIB en 2021 puede caer hasta dos dígitos en algunos países, con un aumento de la pobreza de hasta 45 millones de personas, y de la pobreza extrema, que puede subir en 28, llegando 96 a millones de personas. Se prevé un incremento de la tasa de desocupación (formal e informal) en torno al 13,5%, y un recrudecimiento considerable de las desigualdades: de género, entre grupos de personas, entre territorios, entre *skills* y competencias profesionales, en términos de facilidad de acceso y aprovechamiento de servicios y oportunidades.

Los sectores medios bajos, no pobres pero vulnerables, tienden a ser los más afectados también porque los programas asistenciales de los gobiernos generalmente están dirigidos a los pobres, aunque no llegan a la totalidad de la población necesitada. Ya antes de la pandemia la frustración por el bajo crecimiento económico, la falta de oportunidades y una clase política desacreditada se había manifestado en las elecciones y en protestas masivas en diferentes países. Especial mención merecen las mujeres. Durante el confinamiento y en la etapa de convivencia con el virus se han visto compelidas a ser las principales, cuando no las únicas responsables de las tareas domésticas y de cuidado. Esto limita sobremanera su participación laboral remunerada. En estos meses, junto con reafirmarse la centralidad de los cuidados, se ha puesto en evidencia la insostenibilidad de su organización actual.

La crisis, que empezó en el plano sanitario, se ha convertido en una crisis social y económica. Los planes de recuperación apuntan mayoritariamente a la reactivación de la economía, pero por un lado tienden a articular regreso a la normalidad y desarrollo (agenda verde y digital, reformas, etc.), por otro se proponen sociedades más resilientes, concepto que alude a resistencia y prevención, agregando una idea de futuro y bienestar solidarios. Para que haya resiliencia, se necesitan sistemas de bienestar robustos que prevengan, protejan, resuelvan problemas de desigualdad y refuercen capacidades de las personas, las familias y los grupos. Por sistemas sociales se entiende un amplio abanico de políticas: fiscales, educativas, socio asistenciales, de formación, etc., que concurren a las tres funciones de los sistemas de bienestar: inversión social, protección social y estabilización de la economía. Dado que los costes del desempleo, la pobreza, la exclusión social, la desigualdad de género, etc. no solo los soportan las personas, sino las sociedades en su conjunto, invertir en lo social, además de responder a un derecho, tiene altos rendimientos económicos. La ausencia de inversión social hace las sociedades más vulnerables y agrava las crisis económicas.

Hoy, es fundamental interrogarse acerca de cómo los planes de recuperación abordan al mismo tiempo – y vinculan entre sí – reactivación económica y resiliencia social, cómo conjugan las dimensiones económica y social en el proyecto de región y de país post pandémico. Hacia esta perspectiva abonan favorablemente también dos importantes elementos de novedad: la mayor demanda social de bienes colectivos (de protección y promoción) y la general revalorización de lo “público”.

A la luz de todo lo anterior, una nueva temporada de las políticas sociales para superar la crisis actual y modernizar y ampliar los sistemas del bienestar en América Latina, exige repensar cuatro áreas clave: i) cuáles reformas deben priorizarse para avanzar hacia un sistema del bienestar capaz de desempeñar las tres funciones antes mencionadas; ii) de dónde saldrán los recursos económicos para financiarlas y iii) cómo dotar al sector público de las capacidades para una implementación eficaz y (iv) cómo se incorporan las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en la producción de bienes públicos.

La crisis del COVID ha hundido las economías, tanto por la parte de oferta como de demanda, lo que ha supuesto una reducción de las recaudaciones fiscales, al tiempo que una mayor exigencia de gasto público. Abordar un mejor y más amplio sistema de políticas sociales implicará diseños inteligentes que permitan aumentar la recaudación fiscal y hacer más eficiente el gasto de unos limitados recursos económicos. De forma complementaria, los países latinoamericanos podrían recurrir al endeudamiento por dos razones. Primero, por el entorno de bajos tipos de interés que permite financiarse “muy barato”, y segundo, por un entorno que favorece unos mayores multiplicadores fiscales, especialmente en ámbitos como la salud, la educación, la innovación y las infraestructuras vinculadas al sector productivo.

Una mayor expansión de la acción pública en el ámbito social exige asegurar que los recursos se utilizan de forma eficaz y que no se deja a nadie a atrás. Para ello es necesario avanzar en el desarrollo de las capacidades estatales –políticas y administrativas– que pasan además por una nueva forma de articular iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público. Estas capacidades abarcan diversos ámbitos que van desde dotar de una mayor profesionalización a la administración pública hasta promover una mayor coordinación horizontal (sectorial) y vertical (multinivel), reconstruir las relaciones con los otros dos poderes (Parlamentos y Poder Judicial) o seguir profundizando en los procesos de Estado abierto de manera que la ciudadanía conozca el destino y los resultados de estos recursos, lo que en última instancia debería ayudar a legitimar la acción pública y así reforzar la confianza ciudadana.